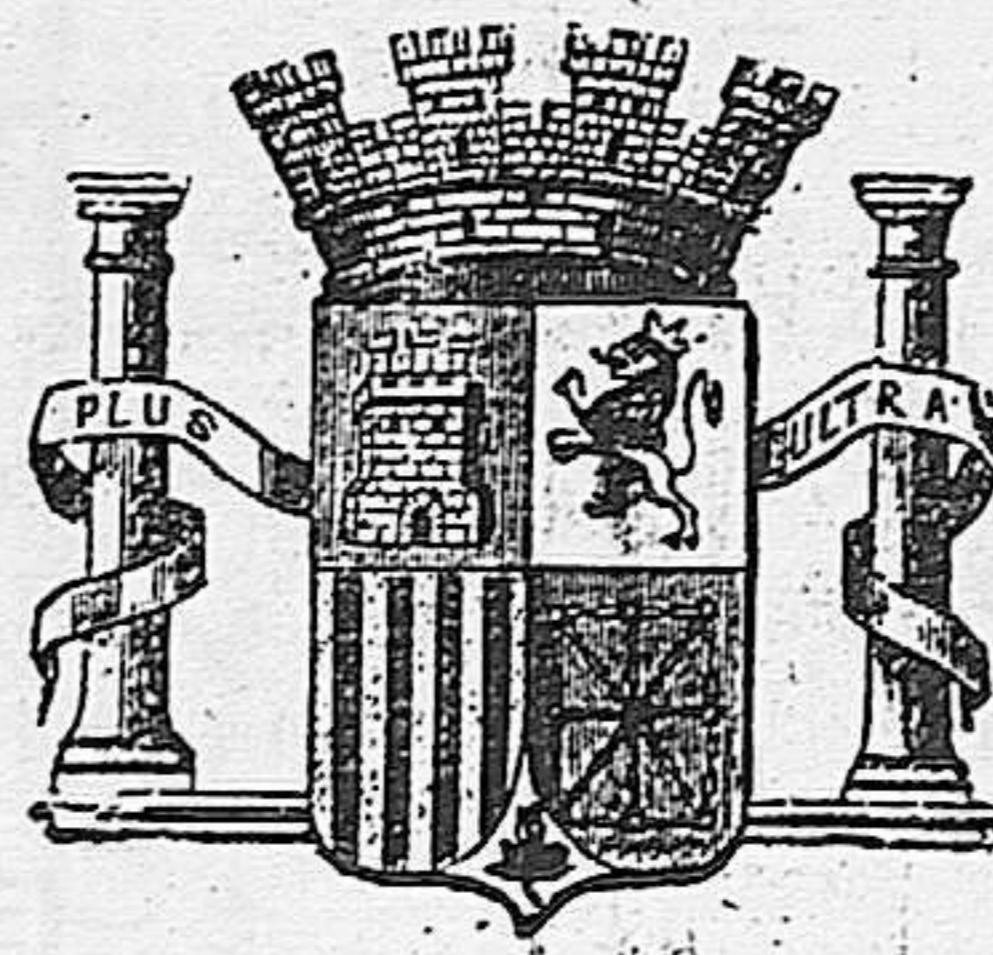


Boletín Oficial



Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

ADVERTENCIA OFICIAL.

Las leyes y disposiciones generales del Gobierno, son obligatorias para cada capital de provincia desde que se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la provincia. (Ley de 23 de Noviembre de 1837.)—Las disposiciones de las autoridades, excepto las que sean de instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente, como asímismo cualquier anuncio concerniente al servicio de la Nación que dimane de las mismas; pero los de interés particular pagaran su inserción, entendiéndose en este último caso con el Editor del Boletín.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Se anuncia la cifra á que ascienden los auxilios facilitados á la compañía concesionaria del ferro-carril de Ponferrada á la Coruña, por obras ejecutadas en la sección de Ponferrada á San Martín de Quiroga durante el mes de Setiembre próximo pasado.

Sección de Fomento.—Ferro-carriles.

El Ilmo. Sr. Director general de Obras públicas, Agricultura, Industria y Comercio, en comunicación de 25 de Octubre último, me dice lo siguiente:

«Con arreglo á lo que dispone la ley de auxilios á las líneas ferreas de Galicia y Asturias y en virtud de la relación valorada y su correspondiente certificación expedidas por el Ingeniero Jefe de la división de León, acreditan-do que la Compañía concesionaria del ferro-carril de Ponferrada á la Coruña ha ejecutado y pagado obras en la Sección de Pon-

ferrada á San Martín de Quiroga, durante el mes de Setiembre próximo pasado, por valor de tres mil cuatrocientas treinta pesetas y dos céntimos; S. A. el Regente del Reino ha resuelto por orden de esta fecha que se entregue á la referida Compañía el equivalente á mil ochocientas ochenta y seis pesetas cincuenta y un céntimos en concepto de anticipo reintegrable y en obligaciones del Estado por ferro-carriles computadas al precio que corresponde.»

Y en virtud de lo dispuesto en el art. 7.^o de la ley de 18 de Octubre del año próximo pasado, he dispuesto la publicación de la preinscripción comunicacion, en la que figura la cantidad entregada á la Compañía constructora del ferro-carril de Ponferrada á la Coruña en concepto de anticipo reintegrable, para conocimiento de los particulares y corporaciones.

Orense 10 de Noviembre de 1870.—José Casal.

ANUNCIOS OFICIALES.

DISTRITO MUNICIPAL DE ORENSE.

CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO ECONÓMICO DE 1869 Á 1870, correspondiente al período económico de 1869 á 1870.

EXTRACTO de la cuenta de fondos municipales correspondiente al expresado trimestre, que comprende las existencias que resultaron en fin del anterior, cantidades recaudadas y las satisfechas en el mismo de las obligaciones del presupuesto.

CARGO.

Escds. Ms.

Existencia que resultó en fin del trimestre anterior..	1365	925
Capítulo 1. ^o Productos de propios y otros efectos públicos de propiedad del comun.	"	"
2. ^o Idem de montes.	"	"
3. ^o Idem de impuestos establecidos.	2321	372
4. ^o Idem de Beneficencia municipal.	"	"
5. ^o Idem de Instrucción pública.	"	"
6. ^o Idem de Ingresos extraordinarios y eventuales.	1	400
7. ^o Resultados de años anteriores por adición.	"	"
8. ^o Recursos autorizados para cubrir el déficit del presupuesto, á saber:		
Recargos sobre la contribución territorial..	"	"
Idem sobre la industrial..	"	"
Idem sobre la de consumo..	"	"
TOTAL CARGO.....	3688	697

RESUMEN.

Importa el Cargo..... 3.688'697
Idem la Data..... 2.727'373

Existencia para el trimestre siguiente. 964'324

De forma que importando el Cargo 3.688 escudos 697 milésimas y la Data 2.728 escudos 373 milésimas según queda expresado, resulta una existencia de 964 escudos 324 milésimas, de que me haré cargo en la cuenta del próximo trimestre.

Orense 28 de agosto de 1870.—El Depositario, Modesto P. Bobo.—El Regidor Interventor, G. Molins.—Está conforme: el Jefe de la Sección de Contabilidad, Santiago Pérez.—V.º B.—El Alcalde, Santos Poyan.

ESTADO DE ORENSE PROVINCIA

Ayuntamiento de Carballedo.

El repartimiento general yecinal de este distrito formado para cubrir los gastos provinciales y municipales del corriente año económico se halla expuesto al público en la Secretaría de Ayuntamiento desde el dia 8 al 14 del corriente mes, a fin de que tanto vecinos como forasteros en él comprendidos puedan enterarse de sus respectivas cuotas y hacer las reclamaciones que les convenga.

Carballido, miembre 5 de 1870.—El Alcalde, Joaquín Rodríguez.

Ayuntamiento de Villamarín.

Ultimado el reparto para cubrir las atenciones provinciales y municipales, por la junta de asociados de este Ayuntamiento para el corriente año económico, se acordó ponerlo al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de diez días, a partir de el dia 9 del corriente año, su cuyo término los que se consideren gravados, vecinos como forasteros, podrán hacer las reclamaciones que les convenga; pasados que sean no serán oídos.

Villanueva 3 de noviembre de 1870. --
Justo Villanueva 30 1870

Ayuntamiento de Villar de Barrios.
-**que** si se cumple el 6 de diciembre
-**el** reglamento, de arbitrios, corres-
-**pondiente** á este distrito municipal y año
-**económico** de 1870, á 71, se halla, últimamente,
-**que** está expuesta al público, así, pues,
los señores hacendados, forasteros, y veci-
-**cinos comprendidos** en aquél, puede
-**conocer**, apercibirse de las cuotas que le
-**han correspondido** á la casa de este Ayun-
-**tamiento** en cuanta importe se les proporción de
-**manejos**; por el término de diez días, no
-**contar** desde la fecha; pasado el cual no
-**se le admitirá reclamación alguna.**
Obligatorio del Barrio 4º de noviembre de
1870.—El Alcalde, Manuel de Prado, en
señaló que el 6 de diciembre del año
-**del** mencionado es establecer el juicio
de Juzgado municipal de Maside.
ya y efectuado el día 11, habiendo
-**Hallándose** Vicente, la secretaria, de
-**Juzgado de paz de Maside, por reanunciar**
que hizo el que la obtuvo, se publica la
-**vacante** por el término de 13 días, a fin
de que los que se suspendieren la plazo, pre-
-**senten** para ello, se presenten en este juzga-
-**dado con** los documentos que estén pre-
-**vistos. Lo que se anuncia para los efec-**
-**tos oportunos.**

Más de 6 de Noviembre de 1870. --
El Juez municipal, Juan Bernardo Fer-
nández.

FORUM OFICIAL
ANUNCIOS NO OFICIALES.

el y no cabiendo popular de Madrid.

Del parte remitido en este dia por la intervencion del Mercado de grano y nota de precios de articulos de consumo, resulta lo siguiente:

Idem de cerdo, á 0⁵¹ pesetas la libra.
Idem de ternera, de 1^{ta} a 1²⁵ pesetas.

Tocino añejo, de 24 a 25 pesetas la arroba; 3.100 lá libras y 2.700 kilogramos.

Idem. Fresco a 20 pesetas la arroba, y

solidinpiye de 2250 á 128 pesetas la arroba; que 1250 á 150, la libra. Y de 271 á 225 el

Lo que se anuncia al público para su conocimiento.

Madrid 8 de noviembre de 1870.—El
Alcalde 1º, Fernando Hidalgo Saavedra.

Imp. de D. Gregorio Rionegro Lozano y C.

apertura de los testamentos, ó codicilos cerrados, será fuero competente el del lugar en que se hubiesen otorgado respectivamente los los escritos sin intervención de Notario, los testamentos ó las carpetas.

16. En los juicios de testamentaria ó abintestato, será competente el fuero del lugar en que hubiere tenido su último domicilio el fallecido.

Si este hubiere tenido su domicilio en país extranjero, será fuero competente el del lugar en que hubiese tenido, el fallecido su último domicilio en España, ó el del lugar donde estuviere la mayor parte de sus bienes.

No obstará esto á que los Jueces municipales del lugar donde alguno falleciese adopten las medidas necesarias para el enterramiento y exequias, en su caso, del difunto, y á que los mismos Jueces y los Tribunales de partido en cuyas jurisdicciones tuviera bienes tomen las medidas necesarias para asegurarlos y poner en buena guarda los libros y papeles, remitiendo las diligencias practicadas á los Jueces á quienes corresponda conocer de la testamentaria ó abintestato, y dejándoles expedita su jurisdicción.

17. En las demandas sobre herencias, su distribución, cumplimiento de legados, fideicomisos universales y singulares, reclamaciones de acreedores hereditarios y testamentarios, mientras estuvieren pendientes los autos de testamentaria ó abintestato, será fuero competente el del lugar en que se conozca de estos juicios.

18. En los concursos de acreedores y en las quiebras, cuando fuere voluntaria la presentación del deudor en este estado, será fuero competente el del domicilio del mismo.

19. En los concursos ó quiebras promovidos por los acreedores, el de cualquiera de los lugares en que se conozca en las ejecuciones.

Será entre ellos preferido el del domicilio del deudor, si este ó el mayor número de acreedores lo reclamare. En otro caso lo será aquel en que antes se decretare el concurso ó la quiebra.

20. En la acumulación de autos correspondientes á diferentes Juzgados ó Tribunales, cuando proceda, según las leyes, será competente el que conozca de los mas antiguos.

Exceptúanse los autos de testamentaria, abintestato, concurso de acreedores y quiebras, en los cuales la acumulación se hará siempre á ellos.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no es aplicable á los autos que estuvieren en diferentes instancias, y en los conclusos para sentencia, los cuales no serán acumulables.

21. En los litigios acerca de recusación de árbitros y de amigables compenadores, cuando ellos no accediesen á la recusación, será competente el fuero del lugar en que residase el recusado.

22. En los recursos de apelación contra los árbitros, en los casos en que corresponda según derecho, será competente la Audiencia del distrito á que corresponda el pueblo en que se haya fallecido, el pleito.

23. En los embargos preventivos será competente el fuero del partido en que estuvieren los bienes que se hubieren de embargar, y á prevención en los casos de urgencia el Juez municipal del pueblo en que se hallasen.

Art. 310. El domicilio de las mujeres casadas que no estén separadas legalmente de sus maridos será el que estos tengan.

El domicilio de los hijos constituidos en potestad, el de sus padres.

El de los menores ó incapacitados sujetos á tutela ó curaduría, el de sus guardadores.

Art. 311. El domicilio legal de los comerciantes en todo lo que concierne a actos ó contratos mercantiles y sus consecuencias, será el pueblo donde tu-

vieren el centro de sus operaciones comerciales.

Los que tuvieran establecimientos mercantiles á su cargo en diferentes partidos judiciales podrán ser demandados por acciones personales en aquel en que tuvieran el principal establecimiento ó en el que se hubiesen obligado, á elección del demandante.

Respecto á los concursos de acreedores y á las quiebras, se estará á lo prevenido en las reglas 18 y 19 del art. 309.

En todo lo que no se refiera á operaciones mercantiles, estarán los comerciantes sujetos á lo dispuesto en el artículo 308.

Art. 312. El domicilio de las compañías civiles y mercantiles será el pueblo que como tal esté señalado en la escritura de sociedad ó en los estatutos por que se ríjan.

No constando esta circunstancia, se estará á lo establecido respecto á los comerciantes en el párrafo segundo del artículo anterior.

Exceptúanse de lo establecido en los párrafos anteriores las compañías en participación, en lo que se refiera á los litigios que puedan promoverse entre los asociados, respecto á los cuales se estará á lo que prescriben las disposiciones generales de esta ley.

Art. 313. El domicilio legal de los empleados será el pueblo en que sirvieren su destino. Cuando por razón de él ambulen continuamente, se considerarán domiciliados en el pueblo en que vivieren más frecuentemente.

Art. 314. El domicilio legal de los militares en servicio activo será el del pueblo en que se hallare el cuarto á que pertenezcan al hacerse elemplazamiento.

Art. 315. En los casos en que esté señalado el domicilio para surtir fuero competente, si el que ha de ser demandado no lo tuviese en algún pueblo de la Península, islas Baleares ó Canarias, será fuero competente el de su residencia. Los que no tuvieren domicilio ni residencia fija podrán ser demandados en el lugar en que se hallen ó en el de su última residencia, ó elección del demandado.

Art. 316. El valor de las demandas para determinar por él la competencia de jurisdicción se calculará por las reglas siguientes:

1.º En los juicios penitarios sobre el derecho de exigir prestaciones anuales y perpetuas, se calculará el valor por el de una anualidad multiplicada por 25.

2.º Si la prestación fuere vitalicia, se multiplicará por 10 la anualidad.

3.º En las obligaciones pagaderas á plazos diversos, se calculará el valor por el de toda la obligación cuando el juicio versase sobre la validez del principio mismo de que proceda la obligación en su totalidad.

4.º Cuando varios créditos pertenezcan á diversos interesados y procediere de un mismo título de obligación contra un deudor común la demanda que cada acreedor ó dos ó más acreedores entablen por separado para que se les pague lo que les corresponda, se calculará como valor de la demanda la cantidad á que ascienda la reclamación.

5.º En las demandas sobre servidores se calculará su cuantía por el precio de adquisición de las mismas servidumbres, si constare.

6.º En las acciones reales ó mixtas se calculará el valor de la cosa inmueble ó litigiosa por el que conste en la escritura más moderna de su enajenación.

Cuando por medio de acción real o mixta se demanden con los bienes las reutas que hayan producido, se acumularán estas al valor de la demanda.

7.º En las demandas que comprendieren muchos créditos contra el mismo deudor se calculará su cuantía por el de todos los créditos recibidos.

8.º En los pleitos sobre pagos de créditos con intereses ó frutos, si en la demanda se pidieren con el principal los

vencidos y no pagados, se hará la computación sumando entre sí el uno y los otros.

Se tendrá por cierto y líquido la cuantía de los frutos cuando el autor exprese en la demanda su importe anual y el tiempo que haya transcurrido sin pagarse.

Si el importe de los intereses ó frutos no fuere cierto y líquido, se prescindirá de él no tomando en cuenta mas que el principal.

9.º La disposición de la regla precedente es aplicable al caso en que se pida en la demanda con el principal los perjuicios.

10. Para la fijación del valor de la demanda no se tomarán en cuenta los frutos ó intereses por correr, sino los corridos.

11. Cuando por los datos expresados en las reglas anteriores no pudiere determinarse el valor de la demanda, se estimará por el que le dieren las partes de conformidad, y estando discordes por el que estime un perito nombrado de común acuerdo por las mismas.

Si no se pusieren de acuerdo sobre la elección de un solo perito, nombrará cada parte el que estime, y el Juez un tercero, para que juntos aquéllos hagan la valoración, dirimiendo el tercero la discordia si la hubiere.

Art. 317. Cuando no pueda determinarse según las reglas del artículo anterior la cuantía de la demanda, no caerá bajo la competencia de la jurisdicción de los Jueces y Tribunales que la tengan limitada por razón de cantidad.

Art. 318. Lo establecido en el artículo 316 no se aplicará á las demandas relativas á derechos políticos, ú honríficos, exenciones y privilegios personales, filiación, paternidad, maternidad, adopción, tutela, curaduría, interdicción y cualquiera otra que versare sobre el estado civil y condición de las personas.

Art. 319. Lo establecido en este capítulo comprendrá á los extranjeros que acudieren á los Juzgados y Tribunales españoles promoviendo actos de jurisdicción voluntaria, interviniendo en ellos, y compareciendo en juicio, como demandantes ó como demandados, contra españoles ó contra otros extranjeros cuando proceda que conozca la jurisdicción española con arreglo á las leyes del reino ó á los tratados con otras Potencias.

Art. 320. Se estará á lo que establezcan las leyes especiales que en determinados negocios tienen otras reglas de competencias.

CAPITULO III.

De la competencia en lo criminal.

SECCION PRIMERA.

Della competencia de la jurisdiccion ordinaria en lo criminal.

Art. 321. Con arreglo á lo establecido en el art. 269 de esta ley, la jurisdicción ordinaria conocerá de todas las causas criminales, á excepción de las que estuvieren reservadas al Senado y de las que expresamente se atribuyen en este título á las jurisdicciones de Guerra y de Marina.

Art. 322. El conocimiento de las causas por delitos en que aparezcan culpables personas sujetas á la jurisdicción ordinaria y otras afuera de su competencia exclusivamente á la ordinaria, la cual será competente para juzgar á todas aquellas en los casos en que el castigo no esté reservado especialmente por la ley al conocimiento de otra jurisdicción.

Art. 323. La jurisdicción ordinaria será competente para prevenir las causas por delitos que cometen los alborados.

Esta competencia se limitará á instruir las primeras diligencias, concluidas las cuales la jurisdicción ordinaria remitirá las actuaciones al Juez que debiere conocer de la causa con arreglo á las leyes, y

pordrá á su disposición los detenidos y los efectos ocupados.

La jurisdicción ordinaria cesará en las primeras diligencias tan luego como conste que la especial competente forma causa sobre el mismo delito.

Art. 324. Considerábase como primeras diligencias las de dar protección á los perjudicados, consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, recoger y poner en custodia cuanto conduzca á su comprobación y la identificación del delincuente, y detener en su caso á los reos presuntos.

Art. 325. Fuera de los casos reservados al Senado, y aquellos en que expresa y limitativamente atribuye ésta ley el conocimiento de determinadas causas al Tribunal Supremo, á las Audiencias y á las jurisdicciones de Guerra y Marina, serán competentes para la instrucción de las causas y castigo de las faltas y de los delitos los Jueces y Tribunales de la demarcación en que se hayan cometido, según su respectiva competencia.

Art. 326. Cuando no conste el lugar en que se cometió una falta ó un delito, serán Jueces y Tribunales competentes para instruir y conocer de la causa.

1.º El de la demarcación en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito.

2.º El de la demarcación en que el reo presunto haya sido aprehendido.

3.º El de la residencia del reo presunto.

4.º Qualquier que hubiese tenido noticia del delito.

Si se suscita competencia entre estos Jueces ó Tribunales, se decidirá dando la preferencia por el orden con que están expresados en el párrafo que precede.

Tan luego como conste el lugar en que se hubiese cometido el delito, se remitirán las actuaciones al Juzgado ó Tribunal de aquella demarcación, poniendo á su disposición á los detenidos y efectos ocupados.

Art. 327. El Juez ó Tribunal competente para la instrucción ó conocimiento de una causa lo será también para conocer de la complejidad en el delito que se persiga, de su encubrimiento y de las incidencias de aquella.

Art. 328. Un solo Juez ó Tribunal de los que sean competentes conocerá de los delitos que tengan conexión entre sí.

Art. 329. La jurisdicción ordinaria entrará en competencia con exclusión de toda otra para juzgar á los reos de delitos conexos, siempre que alguno esté sujeto á ella, aunque los demás sean asfumados.

Art. 330. Lo establecido en el artículo anterior se entiende en el caso de que sea competente la jurisdicción ordinaria para juzgar de los delitos conexos.

Si alguno de estos fuere por su índole y naturaleza de la competencia exclusiva de otra jurisdicción, ésta deberá conocer de la causa que se forme sobre él, sin perjuicio de que la ordinaria conozca de la que se instruya sobre los demás.

Art. 331. Consideráranse delitos conexos de acuerdo con lo siguiente:

1.º Los cometidos simultáneamente por dos ó más personas reunidas.

2.º Los cometidos por distintos tiempos, si hubiese precedido concierto para ello.

3.º Los cometidos como medio para perpetrar otros ó facilitar su ejecución.

4.º Los cometidos para procurar la impunitud de otros delitos.

Art. 332. Son Jueces y Tribunales competentes, por su orden, para conocer de las causas por delitos conexos.

1.º El del distrito en que se haya cometido el delito ó que esté señalada pena mayor.

2.º El que primero conozca la causa en el caso de que los delitos estén señalada igualmente.

3.º El que la villa de gobierno de la Audiencia, atendiendo sólo á la mejor y más pronta administración de justicia, designe en sus casos respectivos señalando

las causas hubieren empezado al mismo tiempo, ó no conste cuál comenzó primero, si los Juzgados ó Tribunales correspondieren al territorio de la misma Audiencia.

4º El que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, teniendo también en cuenta solo la mejor y más pronta administración de justicia, designe en el caso del párrafo anterior, si las causas hubieren empezado en Juzgados ó Tribunales que correspondan a diferentes Audiencias.

Art. 333. Los extranjeros que cometieren faltas ó dilinquieren en España serán juzgados por los que tengan competencia para ello por razón de las personas ó del territorio.

Art. 334. Exceptúanse de lo ordenado en el artículo anterior, los Príncipes de las familias reinantes, los Presidentes ó Jefes de otros Estados, los Embajadores, los Ministros Plenipotenciarios, los Ministros residentes, los Embajadores de planta en las Legaciones; los cuales, cuando delinquieren, serán puestos á disposición de sus Gobiernos respectivos.

Art. 335. El conocimiento de los delitos comenzados á cometer en España y consumados ó frustrados en países extranjeros corresponderá á los Tribunales y Jueces españoles, en el caso de que los actos perpetrados en España constituyan por sí delito, y solo respecto á estos.

Art. 336. Serán juzgados por los Jueces y Tribunales del Reino, según el orden prescrito en el art. 326, los españoles ó extranjeros que fuera del territorio de la Nación hubiesen cometido alguno de los delitos siguientes:

Contra la seguridad exterior del Estado.

Lesa Magestad.

Rebelión.

Falsificación de la firma de la estampilla real ó del Regente.

Falsificación de la firma de los Ministros.

Falsificación de otros sellos públicos.

Falsificaciones que perjudiquen directamente al crédito ó intereses del Estado, y la introducción ó expedición de lo falsificado.

Falsificación de billetes de Banco cuya emisión esté autorizada por la ley, y la introducción ó expedición de los falsificados.

Los cometidos en el ejercicio de sus funciones por empleados públicos residentes en territorio extranjero.

Art. 337. Si los reos de los delitos comprendidos en el artículo anterior hubiesen sido absueltos ó penados en el extranjero, siempre que en este último caso se hubiese cumplido la condena, no se abrirá de nuevo la causa.

Lo mismo sucederá si hubiesen sido indultados, á excepción de los delitos de traición y lesa Majestad.

Si hubiesen cumplido parte de la pena se tendrá en cuenta para rebajar proporcionalmente la que en otro caso les correspondería.

Art. 338. Lo dispuesto en los dos artículos que antecedentes aplicable á los extranjeros que hubiesen cometido alguno de los delitos comprendidos en ellos, cuando fueren aprehendidos en el territorio español ó se obtuviere la extradición.

Art. 339. El español que cometiere un delito en país extranjero contra otro español será juzgado en España por los Juzgados ó Tribunales designados en el artículo 326, y por el mismo orden que se designan si concurriren las circunstancias siguientes:

1º Que se querelle el ofendido ó cualquiera de las personas que puedan hacerlo con arreglo á las leyes.

2º Que el delincuente se halle en territorio español.

3º Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado ó penado en el extranjero, y en este último caso haya cumplido su condena.

Si hubiere cumplido parte de la pena, se observará lo que para igual caso previene el art. 337.

Art. 340. El español que cometiere en país extranjero un delito de los que el Código penal español califica de graves contra un extranjero, será juzgado en España si concurren las tres circunstancias señaladas en el artículo que precede, y por los mismos Jueces que en él se designan.

Art. 341. No podrá procederse criminalmente en el caso del artículo anterior cuando el hecho de que se trate no sea delito en el país en que se perpetró, aunque lo sea, según las leyes de España.

Art. 342. Los españoles que delinquan en país extranjero y sean entregados á los Cónsules de España serán juzgados con sujeción á esta ley en cuanto lo permitan las circunstancias locales.

instruirá el proceso en primera instancia el Cónsul ó el que le reemplace, si no fuere Letrado con el auxilio de un Asesor, y en su defecto con el de dos adjuntos elegidos entre los súbditos españoles, los cuales serán nombrados por el principio de cada año, y actuarán en todas las causas pendientes o incoadas durante el mismo.

Terminada la instrucción de la causa, y ratificadas á presencia del reo ó reos presuntos las diligencias practicadas, se remitirán los autos al Tribunal español que atendida la naturaleza del delito, tenga competencia para conocer de él, y sea el mas próximo al Consulado en que se haya seguido la causa, ó no ser que por fuero personal debiera ser juzgado, el reo por distinta jurisdicción que la ordinaria si hubiera delinquido en España, en cuyo caso lo será por el Tribunal superior correspondiente al fuero que disfrute.

Art. 343. La jurisdicción ordinaria es competente para conocer de las faltas, sin mas excepciones que las que señala esta ley respecto á los militares y marinos.

Art. 344. Los Jueces del lugar en que se cometa una falta son los únicos competentes para juzgarla.

Art. 345. En las faltas cometidas en país extranjero en que sean entregados los que las cometan á los Cónsules españoles, juzgará en primera instancia el Vicecónsul si lo hubiere, y en apelación el Cónsul con su Asesor si no fuere Letrado; á falta de Asesor, con los adjuntos de que habla el art. 342. Si no hubiere Vicecónsul, hará sus veces un súbdito español, elegido del mismo modo que los adjuntos al principio de cada año.

Estos juicios se seguirán en conformidad á las leyes del Reino.

Art. 346. Lo prescrito en esta sección respecto á delitos cometidos en el extranjero se entenderá sin perjuicio de los tratados vigentes ó que en adelante se celebren con potencias extranjeras.

SECCION SEGUNDA.

De la competencia de las jurisdicciones especiales en lo criminal.

Art. 347. La jurisdicción de Guerra y la de Marina serán las únicas competentes para conocer respectivamente, con arreglo á las Ordenanzas militares del Ejército y de la Armada, de las causas criminales por delitos cometidos por militares y marinos de todas clases en servicio activo del Ejército ó de la Armada.

Art. 348. Bajo la denominación de servicio militar activo, para los efectos de esta ley, se comprende el que presta el Ejército permanente y la Marina, el que se hace por los cuerpos de Guardia civil, los Resguardos de Hacienda y cualquier fuerza permanente organizada militarmente que dependa en este concepto del Ministerio de la Guerra ó Marina, y esté mandada por Jefes militares y sujetos á las Ordenanzas del Ejército ó de la Armada en lo que se refiere al cumplimiento de sus deberes militares, aunque tenga por objeto principal auxiliar á la Administración y poder judicial.

Sin embargo, los individuos de los cuerpos que se hallaren en este último

caso no serán responsables á la jurisdicción militar en lo que se refiere á los delitos ó faltas que cometiesen como agentes de las Autoridades administrativas ó judiciales, respecto á los cuales serán juzgados por la jurisdicción ordinaria.

Art. 349. No están comprendidos en el párrafo primero del artículo anterior, y serán por lo tanto juzgados por la jurisdicción ordinaria:

1º Los retirados del servicio, sus mujeres, hijos y criados.

2º Las mujeres, hijos y criados de los que estén en servicio activo.

3º La gente de mar por delitos y munes cometidos en tierra.

4º Los operarios de arsenales, astilleros, fundiciones, fábricas y parques de Marina, Artillería y Ingenieros, por delitos cometidos fuera de sus respectivos establecimientos.

5º Los reos de delitos contra la seguridad interior del Estado y el orden público, cuando la relación ó sedición no tenga carácter militar.

6º Los reos de atentado y desidio contra las Autoridades políticas, administrativas ó judiciales.

7º Los reos por los delitos de tumulto, desórdenes públicos y por pertenecer á asociaciones ilícitas.

8º Los reos de falsificación de sellos, marcas, monedas y documentos públicos.

9º Los reos de robo en cuadrilla.

10. Los reos de adulterio, estupro ó violación.

11. Los reos militares por injuria ó calumnia á personas que no sean militares.

12. Los reos por defraudación al contrabando y delitos conexos cometidos en tierra, á no haberse hecho resistencia armada á la fuerza pública.

13. Los que hubieren delinquido antes de pertenecer á la milicia, ó estando dados de bajo ó desempeñando algún empleo ó cargo público que no sea militar, o habiendo desertado.

14. Los que incurrieren en faltas castigadas en el libro III del Código penal, excepto aquellas á que las Ordenanzas, reglamentos y bandos militares del Ejército y Armada señalen pena mayor, cuando fueren cometidas por militares, las cuales serán de la competencia de la jurisdicción de Guerra ó de Marina.

Art. 350. Las jurisdicciones de Guerra ó de Marina, en sus casos respectivos, serán las únicas competentes para conocer de los delitos siguientes:

1º De las causas criminales por delitos cometidos por militares ó marinos de todas clases en servicio activo, á excepción de los expresados en el artículo anterior.

2º De los delitos de traición que tengan por objeto la entrega de una escuadra, plaza, puesto militar, buque del Estado, arsenal ó almacenes de pertrechos navales ó de municiones de boca ó guerra.

3º De los delitos de seducción de tropa de tierra ó de mar, ya se refieran á militares ó marineros, españoles ó extranjeros, que se hallen al servicio de España, para que deserten de sus banderas ó buques en tiempo de guerra, ó se pasen al enemigo.

4º De los delitos de espionaje, insulso á centinelas, á salvaguardias y tropa armada de tierra ó de mar, y de atentado ó desacato á la Autoridad militar.

5º De los delitos de seducción y auxilio á la deserción en tiempos de paz.

6º De los delitos de robos de armas, pertrechos, municiones de boca y guerra, ó efectos pertenecientes á la Hacienda militar ó de Marina en los almacenes, cuarteles, establecimientos militares, arsenales y buques del Estado, y de incendio cometido en los mismos parajes.

7º De los delitos cometidos en plazas sitiadas por el enemigo, que tiendan á alterar el orden público ó comprometer la seguridad de las mismas.

8º De los delitos que se cometan en los arsenales del Estado contra el régimen

de orden y conservación y seguridad de estos establecimientos.

9º De los delitos y faltas comprendidos en los bandos que con arreglo á Ordenanza pueden dictar los Generales en Jefe de los ejércitos y los Almirantes de las esquadras.

10. De los delitos cometidos por los prisioneros de guerra y personas de cualquier clase, condición y sexo que sigan a ejecución campaña, ó que conduzcan la guerra del Estado.

11. De los delitos de los asentistas del Ejército ó de la Marina que tengan establecidos sus asentos y contratas.

12. De las causas por delitos de cualquier clase cometidos á bordo de las embarcaciones, así nacionales como extranjeras, cuando no sean de guerra, y se cometan los delitos en puerto, bahía, rada ó en cualquier otro punto de la zona marítima del reino; ó por piratas apresados en esta zona, cualquiera que sea el país á que pertenezcan; y de las represalias y contrabando marítimo, naufragios, abordajes y arrabadas.

No obstante lo prevenido en este número, cuando los delitos comunes cometidos en buques mercantes extranjeros en la zona marítima española, lo fueren por los individuos de las tripulaciones contra otros individuos de las mismas, serán entregados los delincuentes que no sean españoles á los Agentes consulares y diplomáticos de la nación cuyo pabellón llevase el buque en que se cometió el delito, y serán reclamados oficialmente, á no disponer otra cosa los tratados.

13. De las faltas especiales que se cometan por los militares ó por individuos de la Armada en el ejercicio de sus funciones ó que afecten inmediatamente al desempeño de las mismas.

14. De las infracciones de las reglas de policía de las naves, puertos, playas y zonas marítimas, de las ordenanzas de Marina y reglamentos de pesca en las aguas saladas del mar.

Art. 351. En todos los casos del artículo anterior, los militares y marinos en servicio activo serán penados con arreglo á las Ordenanzas militares del Ejército y Armada, y los demás solo estarán sujetos á esta penalidad cuando el delito cometido no estuviere castigado en el Código penal, que es la ley que deberá aplicárseles.

CAPITULO IV.

De las cuestiones de competencia.

Art. 352. Podrán promover y sostener las cuestiones de competencia:

1º Los Juzgados municipales.

2º Los Tribunales de partido.

3º Las Audiencias.

Art. 353. No podrán promover competencias:

1º Los Jueces de instrucción.

2º El Tribunal Supremo.

Art. 354. Cuando los Jueces de instrucción que correspondan á un mismo partido no estuvieren conformes acerca de quien deba actuar, no entablaran competencia; pero si no se pusieren de acuerdo después de la primera comunicación, darán cuenta al Tribunal de partido, el que en vista de las comunicaciones de ambos Jueces, decidirá de plano y sin posterior recurso que el Juez debe actuar.

Art. 355. El Tribunal Supremo no formará competencias, y ningún Juez ó Tribunal podrá promoverla contra él.

Art. 356. Cuando algún Juzgado ó Tribunal entabliere en negocios que sean de las atribuciones y competencia del Tribunal Supremo, se limitará este á ordenar que se abstenga de todo procedimiento el que indebidamente ejerciese sus facultades que no son suyas, y que le resultan de antecedentes.

También podrá ordenar que se le presenten para examinar si el Juzgado ó Tribunal conoce de negocios que estén reservados á él por las leyes.

Art. 357. Las cuestiones de compe-